

Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Neopopulism in Colombia: case of the government of Álvaro Uribe Vélez

Carolina Galindo Hernández

Profesora-Investigadora, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario

Email: cgalindo@urosario.edu.co

Fecha de recepción: enero 2006

Fecha de aceptación y versión final: diciembre 2006

Resumen

Este artículo examina el fortalecimiento del poder ejecutivo en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el contexto político actual de la región andina. Tal contexto advierte un cierto desencantamiento frente al sistema democrático en amplios sectores sociales, expresado en una apuesta política hacia fórmulas que parecen reproducir viejos esquemas en las formas de gobernar, tales como el neopopulismo, el retorno de patrones autoritarios y el liderazgo de algunos *outsiders*. En este sentido, se pretende indagar si el programa de gobierno del actual presidente de Colombia corresponde a un proyecto de corte *neopopulista* y se analizan las limitaciones del uso de la categoría *neopopulismo* en la explicación de la actual experiencia política colombiana.

Palabras clave: neopopulismo, democracia, gobierno, Colombia, Álvaro Uribe Vélez, seguridad democrática

Abstract

This article develops an analysis on the strengthening process in the administrative branch of government in Colombia during the administration of President Álvaro Uribe Vélez. This analysis is done within the context of similar processes evolving recently in the Andean Region. This context shows a sort of disenchantment of the democratic system among wide sectors of society, represented in ways of politically aiming at patterns which seem to reproduce old governing schemas like neopopulism, the coming back of old authoritarian patterns and the leadership of outsiders. Considering this background, this article intends to establish if the governing program of the present president of Colombia, Álvaro Uribe actually adjusts to the *neopopulist* line, analyzing at the same time the limitations of the use of the term *neopopulism* in explaining actual political Colombian experience.

Keywords: neopopulism, democracy, Colombia, Álvaro Uribe Vélez, government, democratic security

Quince años después del “retorno a la democracia” en América Latina, se experimenta en la región una inquietante paradoja: pese a los enormes esfuerzos gestados tanto a nivel interno como desde la comunidad internacional por el retorno a la democracia en la totalidad del continente, se experimenta un “desencantamiento” frente al sistema democrático en amplios sectores de la sociedad. Desencantamiento indeseable en la medida en que la mayor parte de los países de la región apostó por la consolidación de una democracia participativa tendiente a superar la tradición de corrupción y exclusión que ha marcado gran parte de su historia política. Sin embargo, la nueva “experiencia democrática” parecería reproducir viejos patrones en las formas de gobernar, expresados en fenómenos como el “neopopulismo”, el fortalecimiento del presidencialismo y el liderazgo de algunos *outsiders*.

En efecto, la inestabilidad política y la dificultad para gestar proyectos tendientes a la consolidación de la democracia, han marcado la trayectoria política del continente en los últimos diez años, especialmente en la región andina y en el cono sur. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia: la incapacidad de los gobiernos anteriores para enfrentar el conflicto armado, sumada a la crisis económica de 1999 generada por los efectos de la implementación de medidas de corte neoliberal a comienzos de los años noventa, ha ampliado el espacio para el fortalecimiento del ejecutivo en el país, que acentúa aún más su presidencialismo, acompañado históricamente de una situación de “estado permanente de excepción”. Tal fortalecimiento del ejecutivo representa una seria amenaza para el mantenimiento de las ya muy deterioradas y cuestionadas instituciones democráticas, así como para la apertura de nuevas opciones de cambio y superación del conflicto armado y de la preocupante situación social que ha marcado la historia del país.

Un examen a esta tendencia del fortalecimiento del ejecutivo constituye el interés central de este artículo. Esta tendencia se estudiará en el contexto de procesos similares presentados de manera reciente en la región andina, los cuales se han identificado comúnmente en los últimos años como la expresión de una nueva forma de “populismo”. Es por ello que pretendo indagar si el programa de gobierno del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, corresponde efectivamente a un proyecto de corte “neopopulista”, a través del examen de las limitaciones del uso de esta categoría en la explicación de la experiencia colombiana.

Populismo y neopopulismo: ¿dos caras de una misma moneda?

Sin duda alguna, el populismo fue el fenómeno político más importante de América Latina durante el siglo XX (Ayala 2004:175) y uno de los términos de mayor debate en la discusión académica dentro y fuera del continente. En efecto, en el tratamiento del que ha sido objeto por parte de los científicos sociales, se advierte la existencia de dos grandes tendencias, sintetizadas por María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone de la siguiente manera:

“el llamado ‘populismo’, ¿es un fenómeno histórico singular que se manifestó en un tiempo y espacio determinado, que representa una etapa particular del desarrollo de una sociedad?, ¿o es una categoría analítica que puede aplicarse a un fenómeno ‘populista’ más amplio que se manifiesta en diferentes sociedades y épocas?, ¿o es un fenómeno histórico y una categoría analítica a la vez?” (Mackinnon y Petrone 1999:17)¹.

1 A propósito de la discusión actual sobre neopopulismo, en los últimos años han aparecido algunos debates interesantes alrededor del carácter científico y las

Esta misma opinión es compartida por Marco Palacios, quien señala que el adjetivo “populista” se caracteriza por ser elástico y ambiguo: en América Latina parece tratarse de un producto lingüístico de los conflictos estatales y sociales que irrumpen cuando el orden capitalista industrial trata de gestarse y consolidarse. Y en el plano político se expresa como un conjunto de tensiones entre el constitucionalismo liberal de origen ilustrado, legitimador del dominio oligárquico, y la construcción estatal-nacional de la época de la política de masas, con sus peculiares variantes clientelistas del Estado de bienestar, que alcanzara su apogeo entre 1945 y 1975 (Palacios 2000:35).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el populismo corresponde tanto a una categoría analítica como a un fenómeno histórico o época específica en particular, se plantea entonces un segundo problema en el tratamiento dado a este término y es el de la pertinencia de su utilización en la explicación de una serie de fenómenos políticos que se inscriben en un nuevo contexto económico, político y social en la región, en otras palabras, en el contexto de la democratización y de la implementación del modelo neoliberal de desarrollo.

Esta pregunta puede responderse de manera afirmativa en la medida en que se considere el populismo desde un punto de vista restringido, es decir, que se le considere estrictamente como un *estilo* político que, en palabras de Alan Knight, característicamente involucre una proclamada relación con “el pueblo”, una mentalidad expresada en la utilización del término “ellos y nosotros” y un periodo de crisis y movilización o desde una variante “más liberal” del fenómeno, asociada con la descomposición de formas institucionalizadas de representación política que a menudo se produce durante periodos de trastorno social y económico (Knight 1998:227). En este sentido, para analistas como Kenneth Roberts, aún restringidos por la austeridad

fiscal y las reformas de mercado, los líderes personalistas han descubierto diversos instrumentos políticos y económicos para movilizar el apoyo del sector popular cuando las instituciones intermedias están en crisis (Roberts 1999:380). Haciendo abstracción de las diferentes perspectivas desde las cuales puede ser abordado el populismo², la respuesta afirmativa a la pregunta sobre la pertinencia de la utilización de populismo en la explicación de las crisis políticas y sociales en América Latina puede apoyarse en una serie de rasgos característicos recogidos por Roberts: 1) un patrón personalista y paternalista, aunque no necesariamente carismático, de liderazgo político, 2) una coalición política poli clasista, heterogénea, concentrada en los sectores subalternos de la sociedad, 3) un proceso de movilización política de arriba hacia abajo, que pasa por alto las formas institucionalizadas de mediación o las subordina a vínculos más directos entre el líder y las masas, 4) una ideología amorfa o ecléctica, caracterizada por un discurso que exalta los sectores subalternos o es

2 En los diversos trabajos sobre el populismo latinoamericano se pueden identificar varias perspectivas, tendencias e incluso tipologías desde las cuales se puede abordar el fenómeno. En este sentido, los trabajos de Margaret Canovas (AÑO) dan cuenta de variantes del populismo inscritas en una época determinada (“fundadores”, “generación intermedia” y “neopopulistas”). Robert Dix (1985) distingue básicamente entre “populismo autoritario” y “populismo democrático”. Por último, el estudio de Kenneth Roberts (1999) identifica más bien cuatro perspectivas básicas desde cada una de las cuales se puede analizar el fenómeno: una *histórica-sociológica* que enfatiza las coaliciones sociopolíticas multclasistas que surgen típicamente durante las etapas tempranas de la industrialización en América Latina; la perspectiva *económica*, que reduce el populismo a la indisciplina fiscal y a un conjunto de políticas expansionistas o redistributivas que se adoptan en respuesta a presiones de consumo de masas; una perspectiva *ideológica* que asocia el populismo con un discurso ideológico que articula una contradicción entre “pueblo” y “bloque de poder”; y la perspectiva *política*, que equipara el populismo con un patrón de movilización verticalista aplicado por líderes personalistas y que omite o subordina las formas institucionales de la mediación política.

antielitista y/o *antiestablishment*, y 5) un proyecto económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas ampliamente difundidos con el fin de crear una nueva base material para el apoyo del sector popular.

Sin embargo, a pesar de contar con una serie de criterios que permitirían una aproximación a la experiencia colombiana, es muy importante tener en cuenta para el análisis algunas discusiones que plantean una cierta compatibilidad entre una nueva forma de populismo y los esquemas políticos, económicos y sociales propios de la implementación del modelo neoliberal de desarrollo en el continente. Un primer debate (en completa sintonía con la tipología presentada anteriormente y compartida por la mayor parte de los expertos) considera que, si bien el populismo se adscribió originalmente en un contexto y a partir de unas orientaciones económicas totalmente contrarias al neoliberalismo³, es posible hablar de una especie de *neopopulismo* en este contexto, en la medida en que se presenta una especie de adaptación de los viejos esquemas de un populismo estructural a los nuevos retos generados por el clima de crisis económica y de malestar social provocados por la inserción en la dinámica de la globalización (Entrena 2001:110). Esto se refleja en la persistencia de un llamado a las clases más necesitadas, así como en un marcado carácter nacionalista de los discursos. Además, se suman elementos nuevos como la apelación a recursos de fuerte impacto mediático, un proceso de toma de decisiones e implementación

de políticas caracterizado por un fuerte estilo personalista y autoritario, combinado -paradójicamente- con criterios tecnocráticos.

Una segunda discusión, representada especialmente por Carlos Vilas, José Nun, Marcos Novaro y Aníbal Quijano, cuestiona seriamente la existencia de un neopopulismo, señalando la deficiente comprensión del fenómeno de base -el populismo- en su formulación: según esta postura, ni los escenarios socioeconómicos, ni su articulación en la matriz institucional del Estado, ni el tipo de relación dirigentes/seguidores, ni el diseño global del régimen delegativo o supuestamente neopopulista y los intereses que él promueve, guardan una relación significativa con el populismo. Si bien el fortalecimiento de rasgos como el personalismo y el nacionalismo en diferentes países latinoamericanos responde a un encuadramiento histórico y estructural bastante preciso (frustración de amplios sectores de la población frente a los resultados obtenidos por los procesos de democratización, apertura, descentralización y el nuevo modelo económico), no es posible deducir que este encuadramiento permita, en primer lugar, identificar estos personalismos y liderazgos en épocas de tensión con una cierta forma de populismo. Para Vilas, el surgimiento de este tipo de regímenes políticos de fuerte concentración del poder en liderazgos de alto perfil personal está relacionado con un conjunto variado de factores, de peso desigual de acuerdo con las cambiantes circunstancias y carece de sentido llamar neopopulistas a regímenes o liderazgos políticos neoliberales que tratan de destruir sistemáticamente todo aquello que fue conseguido por las luchas populares y bajo regímenes nacional-populares:

“En lo que el populismo significó de desarrollo de un capitalismo con distribución de ingresos y amplia organización popular, estos regímenes promueven la concentración del capital, el desmantelamiento de

3 El populismo latinoamericano “originario” se inscribe en la etapa de desarrollo de sustitución de importaciones, orientada por políticas estatistas y fuertemente intervencionistas fundadas en la protección de las industrias estatales y nacionales y mecanismos subsidiarios orientados a las clases menos favorecidas. Para un análisis más detallado de las políticas económicas adscritas al populismo ver el ya clásico estudio de Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards *The macro - economics of populism in Latin America*, 1991, Chicago University Press.

servicios públicos estatales, la desmovilización popular y el debilitamiento de las condiciones sociales para el ejercicio de la ciudadanía. En lo que el populismo fue participativo, estos regímenes son autoritarios; el efecto social y políticamente integrador y movilizador del populismo es en estos regímenes desmovilización, marginación y fragmentación; la promoción de grandes organizaciones sociales es ahora individualización forzosa de las relaciones sociales; el capitalismo productivo con distribución de ingresos y crecimiento del empleo fue reemplazado por la desindustrialización, el deterioro de los mercados de trabajo y la especulación financiera; el Estado regulador fue transformado en estado privatizador” (Vilas 2004: 35-36).

Como se puede advertir, estas dos grandes tendencias con respecto al tratamiento del neopopulismo pueden adquirir un mayor grado de relevancia dependiendo del conjunto de factores y situaciones frente a las cuales se empleen como categorías de análisis. Y es precisamente que a propósito del caso colombiano se pondrán a prueba estas dos perspectivas para tratar de establecer si, efectivamente, el programa de gobierno del actual mandatario Álvaro Uribe Vélez corresponde a un proyecto de corte neopopulista.

La apuesta por la seguridad democrática y el fortalecimiento del ejecutivo

El 26 de mayo de 2002, con un porcentaje cercano al 53,2% del total de votos, Álvaro Uribe Vélez fue electo como presidente de Colombia. Los exitosos resultados obtenidos en los comicios se explicaban fundamentalmente por la expectativa generada en diferentes sectores de la sociedad civil alrededor de una “política de mano dura”, tendiente a la resolución del conflicto armado que afectaba

al país desde hace más de cincuenta años. En contraste con la administración inmediatamente anterior de Andrés Pastrana (en la que se realizaron infructuosas concesiones a los grupos subversivos -especialmente a las FARC- en aras de una solución negociada al conflicto), el programa de gobierno planteado por Uribe durante su campaña electoral tenía a la seguridad como su pilar fundamental, a través de una nueva orientación en el tratamiento dado a los “enemigos internos” y a un fortalecimiento del autoritarismo de Estado en aras de la recuperación de la soberanía perdida en una buena parte del territorio del país.

Las expectativas en torno a la gestión de Uribe se concentraron alrededor de tres objetivos fundamentales: 1) mejorar la eficacia de la lucha antiguerrillera, 2) restaurar el principio de autoridad (a partir de la ejecución de las reformas institucionales necesarias) y 3) enderezar la situación económica y social. Tales metas eran difícilmente compatibles en la medida en que el aumento militar atentaba contra la austeridad económica, las reformas institucionales ponían en peligro el apoyo de la clase política⁴ y las exigencias del corto plazo irían en contravía del crecimiento y de las inversiones sociales. Pero, por otro lado, dichas expectativas eran fuertes en la medida en que se proyectaban a partir de un “nuevo estilo” de gobierno centrado en la recuperación de la soberanía del Estado, el cual, para Daniel Pécaut, se caracteriza por una cierta “prisa”:

“Siempre en primera línea, interviniendo de modo simultáneo en todos los frentes de acción gubernamental, sólo delegando el mínimo, esforzándose en cohesionar a

⁴ Es necesario recordar que una de las propuestas bandera de la campaña de Uribe consistió en la reducción del tamaño del Congreso, uno de los órganos considerados por la opinión pública como uno de los más corruptos del país.

civiles y militares a la vez que ejerce un minucioso seguimiento sobre el curso de sus decisiones y de su ejecución, evaluando una y otra vez los resultados, pidiendo cuentas en público. Asiste cada semana en compañía de algunos de sus ministros a las diversas regiones para sostener allí ‘consejos regionales de seguridad’ y ‘consejos comunales’ destinados estos últimos a recoger quejas y peticiones de los habitantes... Ha impuesto a otros un estilo frenético” (Pécaut 2003:79).

Este ritmo vertiginoso de acción de la figura del presidente -completamente atípico en la historia colombiana y sintetizado en su consigna “trabajar, trabajar y trabajar”- explica en buena parte el hecho que su popularidad haya llegado a niveles que oscilaron entre un 60 y un 70%, pese al fracaso de una de sus más importantes iniciativas (el sometimiento a referendo de una amplia reforma política para reformar la legitimidad del conjunto de la acción gubernamental), de las polémicas alrededor de las políticas de seguridad democrática y de reinserción de grupos paramilitares, así como del crecimiento de la fuerte deuda pendiente que en materia social se tiene con las clases más necesitadas. Estos niveles de popularidad fueron estratégicamente capitalizados en la medida en que contribuyeron a la aprobación de un acto legislativo que permitió la reelección presidencial (en medio de fuertes polémicas sobre la legitimidad de este acto y sobre sus posibles consecuencias en la consolidación del estado de derecho y de unas instituciones democráticas que logren responder efectivamente a las demandas sociales y políticas propias de un esquema político ampliamente participativo), y en tanto que las metas del gobierno se proyectan a un plazo que desborda el límite de tiempo establecido en la Constitución.

En efecto, tras imponerse con un 62.23% de los votos (aproximadamente 7,5 millones⁵) en las elecciones del 29 de mayo de 2006, el

presidente Uribe Vélez aseguró un segundo mandato tendiente a dar continuidad a la “Política de Seguridad Democrática”, pilar fundamental del plan de desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” y de la campaña electoral de su primer gobierno. Algunas de las premisas y disposiciones de acción de esta política se han constituido en un campo propicio para la consolidación de un Estado autoritario que, para algunos analistas⁶, ha sido equiparado con algunos de los gobiernos calificados como neopopulistas en la región.

En esta línea, el “Estado Comunitario” se proyecta como un “estado participativo que involucre a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales. Un estado gerencial que invierta con eficiencia y austeridad los recursos públicos. Y un estado que privilegie la autonomía regional con transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria” (Presidencia de la República 2002:15). En este documento, carta de navegación de las políticas del ejecutivo, brindar seguridad democrática se persigue como el primer objetivo que orientará la acción del gobierno. Este objetivo se fundamenta a partir del supuesto de que “sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y no puede haber futuro”. El documento entiende la seguridad democrática como una categoría que trasciende el concepto de seguridad nacional, ligado a la capacidad del Estado para penalizar y disuadir a quienes se contraponen a la normatividad vigente. Para alcanzar tal seguridad democrática, el gobierno plantea una estrategia comprensiva que incluye, por una parte, el fortalecimiento de la fuerza pública para recuperar el control del territorio y proteger la infraes-

5 Pese a la alta votación obtenida por el candidato-presidente, es importante destacar que los pasados comicios estuvieron caracterizados por una baja participación representada por el 45% del electorado.

6 Véase el estudio de Cristina de la Torre, *Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia*, 2005, La Carreta Editores, Medellín.

estructura nacional y, por otra, la desarticulación de la producción de drogas, el fortalecimiento de la justicia y la atención a zonas deprimidas y de conflicto (Presidencia de la República 2002: 17).

Después de cuatro años de implementación, se advierte que buena parte de las líneas de acción planteadas en esta política han vulnerado en buena parte las garantías de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como evidencia el tránsito de un “Estado Comunitario” (aún por construir) a un Estado autoritario que agudiza y degrada aún más la situación de división y conflicto interno por la que atraviesa el país. La “seguridad democrática” representa más bien un regreso a los viejos esquemas de la “seguridad nacional” (Galindo Hernández 2005:496) en la medida en que se entiende la idea de la defensa nacional en términos exclusivos de la razón de Estado y constituye más bien una adaptación de los términos de la *seguridad nacional* para designar las nuevas situaciones, actores y problemas en el contexto de una democracia participativa. Este es el caso específico de la línea de acción orientada hacia la cooperación “Cooperar para la seguridad de todos”, la cual reza:

“El Gobierno promoverá la cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en la aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de Derecho, con el fin de que cada ciudadano contribuya a la prevención del terrorismo y de la delincuencia, proporcionando información relacionada con las organizaciones armadas ilegales... Si 44 millones de colombianos acompañan al Estado y se sienten apoyados por él, fracasará el terrorismo.

Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas

ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando información que permita la prevención y persecución del delito... Los cooperantes responden al principio de solidaridad y al deber ciudadano de contribuir al objetivo común de la seguridad. Su cooperación, a diferencia de la de los informantes, no será remunerada.

De manera complementaria, se ha puesto en práctica un programa de recompensas para aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, den a conocer información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales...” (Presidencia de la República – Ministerio de Defensa 2003:61).

Estas líneas de acción comenzaron a llevarse a la práctica unos pocos días después de la posesión del Presidente en el mes de agosto de 2002 y de ser declarado el Estado de Conmoción Interior, a raíz de una serie de atentados realizados contra el acto de posesión en Bogotá y en otras ciudades del país. Las medidas contempladas fueron acompañadas de una política de fortalecimiento de las fuerzas militares (a través de la ampliación de sus facultades y de la creación de “zonas de rehabilitación” en algunas regiones del país), así como de una propuesta de reforma a la administración de justicia tendiente a la limitación de las competencias de las Cortes en aspectos relacionados con la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. Desde esta perspectiva, se invitaba e incentivaba a la población civil a combatir a los enemigos internos de la nación. La frontera existente entre la idea de un Estado social de derecho (tal y como se define a la nación colombiana) y un Estado de corte autoritario comenzaba a desdibujarse a partir de la expedición y puesta en práctica de estas medidas. Solamente mediante la radicalización de la polarización del país: patriotas/ciudadanos comprometidos

contra terroristas, sería posible alcanzar la tan anhelada seguridad democrática. Una seguridad posible gracias al fortalecimiento del ejecutivo y a una ciudadanía aliada capaz de identificar y combatir a un enemigo, en este caso no solamente los grupos alzados en armas, sino todos aquellos que cuestionen de alguna u otra forma el accionar del gobierno.

Se advierte entonces en esta polarización la cristalización de un rasgo propio de los gobiernos populistas de antaño como es el establecimiento de un sujeto político, “los patriotas”, que representa una idea de un “nosotros” (podríamos decir de un “pueblo”, según la caracterización de Alan Knight) que es posible gracias a la existencia de un “ellos”, encarnado en los terroristas o en quienes, desde diferentes frentes, manifiestan algún tipo de oposición al gobierno. En el contexto de esta polarización surge entonces un sentimiento de nacionalismo exacerbado, manifestado principalmente a través de los medios de comunicación, que marcó a amplios sectores de la ciudadanía. Al margen de la existencia y de las acciones de los violentos, confluían en el espacio de la opinión pública colombiana dos grandes fuerzas, a favor o en contra del gobierno respectivamente. Este repentino sentimiento de patriotismo fundamentado en una política de mano dura contra los violentos o en una crítica a la misma, parecía radicalizarse y canalizarse, por ejemplo, a través de la figura del referendo promovido por el ejecutivo en el primer año de gobierno, o en las gestiones tendientes a la aprobación de la reelección inmediata del actual presidente, en el segundo y tercer años.

Sin embargo, y de manera paralela, el conflicto armado -y la radicalización de las posturas frente a su tratamiento- continúa sin posibilidad alguna para una salida negociada, ni por parte del gobierno ni por parte de los grupos subversivos; más aún cuando se han realizado importantes concesiones para la desmovilización e grupos paramilitares, clara-

mente identificados como simpatizantes del actual gobierno, los cuales han logrado consolidar su poder regional a través de estos procesos y de la legalización de algunas de sus actividades económicas. Igualmente, la inequidad social⁷ y la inconformidad de amplios sectores de la población aumentan aunque las cifras que dan cuenta del mantenimiento de la popularidad inicial del presidente afirmen lo contrario. El diagnóstico es poco alentador para una de las “democracias más estables y antiguas del continente”: se evidencia un autoritarismo de estado que hace parte de un conjunto de situaciones análogas en otros países de la región y que algunos analistas pre-

7 De acuerdo con Libardo Sarmiento (2004), aunque el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba el aumento del gasto social, el mejoramiento de la focalización del gasto y la consolidación de un sistema de protección social para que las crisis económicas no comprometiesen por completo las posibilidades futuras de los grupos más vulnerables como los tres grandes desafíos del gobierno Uribe en el ámbito social, es importante resaltar que mientras que en 2001 el 74,6% de los colombianos se encontraba bajo condición de pobreza y su ingreso equivalía al 43,4% del ingreso promedio de la población, en el año 2004 (administración Uribe) la incidencia de la pobreza aumenta a 77,3% y su ingreso promedio equivale a 43,6% del general. Un importante factor explicativo de esta situación, entre otros, se encuentra en el hecho que la cuádruple crisis rural -guerra, pobreza, recesión e importación masiva de alimentos- ha intensificado la migración hacia las ciudades durante las dos últimas décadas. En efecto, la población urbana en Colombia crece a un ritmo anual de 2,45% y la tasa rural a 0,51% debido especialmente al desplazamiento causado por la violencia que ha dejado un saldo de 3,5 millones de personas hasta el año 2004. Estos indicadores, entre otros, permiten señalar a Sarmiento que las políticas públicas de la administración Uribe “no han atacado el malestar social que genera los graves problemas de pobreza, indigencia y desigualdad: tales políticas públicas operan como simples paliativos de los efectos estructurales de exclusión e injusticia que genera el sistema y el estilo de desarrollo colombiano. Siguiendo la tradición, el enfoque de la política social retorna al asistencialismo orientado a los más pobres entre los pobres, a la vez que la clase dominante continúa esperando que sólo el crecimiento económico resuelva todas las patologías de la sociedad” (Sarmiento 2004: 95-96).

tenden identificar con el surgimiento de una nueva forma de populismo.

Ausencia de populismo en Colombia: continuidades y discontinuidades

A diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia no ha contado con grandes experiencias de carácter populista. Con la excepción de los casos de líderes como Jorge Eliécer Gaitán en la década del cuarenta y de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) encabezada por el ex-dictador Gustavo Rojas Pinilla⁸ a finales de los años sesenta, la trayectoria política colombiana ha estado marcada por una fuerte ausencia de populismo que, para Palacios (2001) y Pécaut (2000: 46), no solamente ha significado un vacío en la construcción de un gran proyecto nacional sino que, igualmente, se constituye en buena medida como uno de los principales factores explicativos del surgimiento y permanencia de la crítica situación de violencia política y social experimentada en el país en los últimos cincuenta años.

En este sentido, cualquier análisis sobre una experiencia neopopulista en Colombia requiere tener en cuenta este importante antecedente sobre la ausencia de populismo en la historia del país⁹, en la medida en que un examen de las posibilidades, continuidades y rupturas del fenómeno populista permitirá establecer elementos de juicio más precisos

para calificar o no al actual gobierno como neopopulista. En efecto, desde una perspectiva comparativa en la larga duración, se puede señalar que en la totalidad de los países latinoamericanos en los que se acusa el fenómeno neopopulista se ha vivido una experiencia de populismo anterior en diferentes grados de intensidad (son los casos de Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil y México).

Por el contrario, la construcción de la idea de nación alrededor de dos grandes proyectos políticos antagónicos (encarnados en los partidos liberal y conservador) impidió en Colombia la consolidación de una “verdadera” unidad nacional. De acuerdo con Pécaut (2000:47-48), la realización del populismo en Colombia fue obstaculizada por tres grandes factores: a) un alto grado de fragmentación social, que hace referencia a las características del territorio, la coexistencia de diferentes centros urbanos de importancia y el mantenimiento de innumerables zonas sustraídas al control del Estado, b) la división partidista transmitida de generación en generación y, por último, c) la gestión privatizada de la economía. Desde esta misma perspectiva, Palacios (2000: 39) agrega que la ausencia de populismo en Colombia se encuentra fuertemente relacionada con una marcada tradición constitucional y antimilitarista que, desde el siglo XIX, hundió cualquier posibilidad de consolidación de un fuerte liderazgo unipersonal. En otras palabras, “la política, considerada como la sumatoria de prácticas locales abigarradas, mezcló diferencias e igualitarismos; conjuras, procesos electorales y guerras civiles; mucho panfleto y conversación pública y privada; todo encuadrado por el caciquismo y las lealtades de familia a la bandera roja y a la bandera azul. Localismos que hicieron naufragar a todos los hombres fuertes, comenzando Bolívar. Tradición que viene de la época colonial y de allí deriva sus notas de oligárquica, legalista y civilista”.

8 Es importante señalar que Colombia tampoco cuenta con una fuerte tradición de dictaduras militares en el siglo XX. Incluso, la primera parte del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) fue respaldado por parte de un fuerte sector de las elites encabezadas por los dos grandes partidos políticos tradicionales.

9 Aquí apelamos a la observación realizada por Norbert Elías, según la cual los estudios sobre el problema de la construcción de la nación y de los procesos de formación del Estado deben ser realizados desde la perspectiva de la *larga duración* (Elías 1998:101).

Con respecto a las consecuencias de la imposibilidad de realización de un caudillismo fuerte en el siglo XIX o de un proyecto populista en la primera mitad del XX en Colombia, vale la pena señalar, por ejemplo, que tanto la violencia de carácter bipartidista de mediados del siglo XX, como el surgimiento de guerrillas revolucionarias y diversas modalidades de contrainsurgencia que han desencadenado la más larga y cruenta confrontación armada de la historia del país en las últimas cinco décadas, se explican en buena parte por la inexistencia o el fracaso de los populismos en el país¹⁰. Pese a la fuerza generada por los liderazgos y propuestas políticas de Jorge Eliécer Gaitán (cuyo asesinato en 1948 se constituyó como el acontecimiento que desencadenó de manera definitiva el actual conflicto armado) y del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla (quien logró consolidarse como un “peligroso” contendor de los partidos políticos tradicionales a finales de los años sesenta), nunca logró gestarse un proyecto de unidad nacional sobre bases populares: la praxis política en Colombia seguía sujeta a los imperativos autoritaristas y antiliberales de los partidos tradicionales a los que difícilmente podían sustraerse los líderes emergentes. Esta ausencia de proyecto y la imposibilidad de “cambiar la sociedad desde arriba” abrió el camino a la violencia y a la insurgencia como las únicas alternativas a la exclusión social y política generada por los partidos tradicionales. Por estas razones, el proyecto político del actual mandatario Álvaro Uribe Vélez se presentará como una novedad histórica, como un “verdadero proyecto de unidad nacional” articulado alrededor de la lucha contra el terrorismo y como la única salida eficaz a la situación de violencia generada cincuen-

ta años atrás, gracias a la iniciativa de un liderazgo fuerte y unipersonal.

En un contexto de “crisis” generada por el conflicto armado, la corrupción y la implementación del modelo neoliberal, la formulación de este programa de unidad nacional alrededor de la seguridad democrática (sumada al liderazgo carismático y a la retórica contra las prácticas de ‘politiquería’ de los partidos tradicionales en Colombia) ha permitido establecer en algunos círculos académicos, como ya se había señalado, que la figura de Álvaro Uribe Vélez se presenta como un caso más entre los neopopulismos emergentes en América Latina. Sin embargo, a partir de un examen más cuidadoso desde la caracterización de Roberts y la crítica a esta perspectiva por parte de Carlos Vilas, será posible establecer hasta qué punto podría existir un grado de correspondencia entre el gobierno Uribe y una forma particular de populismo.

El estilo político de gobierno y la figura personal de Álvaro Uribe Vélez ha marcado una ruptura significativa con relación a sus antecesores y a otros importantes dirigentes políticos de Colombia. Aunque el actual mandatario había ocupado importantes cargos de elección popular como gobernador de Antioquia y senador (desde los cuales había establecido una clara postura con relación al tratamiento a dar al conflicto armado), será desde la campaña presidencial del año 2001 en la que apelará a toda una serie de recursos mediáticos tendientes a presentar un proyecto de unidad nacional en torno a la “lucha contra el terrorismo” y a una resolución eficaz del conflicto armado. Esta idea de la recuperación de la autoridad estatal en buena parte del territorio nacional a través de una “política de mano dura” constituyó toda una novedad en términos programáticos y discursivos con respecto a los otros candidatos y a las administraciones más recientes, la cual sumada a la “lucha contra la corrupción y la politiquería” logró capturar la atención (y los

¹⁰ Sobre este punto, véase en particular los artículos de Daniel Pécaut “Populismo imposible y violencia: el caso colombiano” y de Marco Palacios “Presencia y ausencia de populismo: un contrapunto colombo-venezolano”.

votos) de diversos sectores sociales, permitiendo un contundente triunfo en las urnas en la primera vuelta¹¹.

Esta novedad se ve reflejada no solamente en las medidas y políticas propuestas e implementadas desde comienzos de su administración (sobre las cuales se hizo alusión en la sección anterior), sino en toda una serie de estrategias tendientes a capturar la atención de los medios de comunicación y el respaldo de la ciudadanía al programa de gobierno en general y a la política de seguridad democrática en particular. Una de las más importantes e innovadoras estrategias es la realización de consejos comunitarios de gobierno en todos los rincones del país, transmitidos en vivo por radio y televisión con una duración que a veces supera las ocho horas. A través de la realización y transmisión de estos consejos se ha logrado crear todo un imaginario alrededor de la figura del presidente como un mandatario que accede directamente a las regiones, está atento a las necesidades de la población, toma nota de los problemas y exige soluciones inmediatas a sus subalternos a través un atípico proceso de petición de cuentas en público. En otras palabras, el presidente se hace cargo a título personal de cada una de las reclamaciones y peticiones realizadas por los diferentes sectores sociales en estos consejos, consolidando así la imagen de un presidente que trabaja sin descanso y que es capaz de asumir todos los frentes. Tal imagen sumada al discurso sobre la necesidad de librar una guerra sin cuartel contra “la corrupción y la politiquería” ha logrado, a pesar de las dificultades y serias contradicciones que han caracterizado a su gestión, que la figura de

Uribe haya alcanzado altos índices de popularidad que se han mantenido a lo largo de su administración en un nivel cercano al 70% y que, como ya se había señalado, fueron capitalizados para su reelección inmediata.

Otro elemento novedoso en el estilo de gobierno de Uribe lo constituye, sin duda alguna, el lenguaje empleado tanto en sus discursos políticos oficiales como en el trato directo con la población y en la descripción de situaciones particulares. Si bien un análisis del discurso político de Uribe desborda los objetivos del presente artículo, es importante señalar el uso de un lenguaje fuerte contra los grupos armados y de carácter paternalista al hacer referencia a los sectores de la población más vulnerables. Este estilo de lenguaje, caracterizado por el uso de diminutivos y calificativos despectivos, ha logrado generar una mayor aceptación de la figura del presidente en la medida en que se presenta como un mandatario cercano al sentir de las necesidades y del *ethos* del pueblo colombiano.

Hasta ahora pueden advertirse, entonces, tres rasgos característicos en la gestión gubernamental de Uribe: a) un discurso de unidad nacional en torno a la lucha contra el terrorismo, b) un estilo personalista y paternalista en el que se asume al presidente como un incansable trabajador cuya más importante preocupación es el bienestar del pueblo colombiano y, por último, c) un lenguaje beligerante y provocador que lo acerca a los sectores populares. Y son estos rasgos característicos los que han permitido, en primera instancia, calificar al actual gobierno como populista. Sin embargo, al examinar de cerca los rasgos característicos básicos del populismo planteados por Roberts, se plantean serias dudas sobre esta correspondencia.

En primera instancia, vale la pena señalar que si bien la gestión de Uribe se identifica totalmente con un patrón personalista y paternalista de liderazgo político apoyado en una ideología amorfa o ecléctica caracterizada

11 Sin embargo, es importante señalar que la aceptación de este discurso (y el consecuente triunfo de Uribe) contó con el respaldo económico y político de influyentes grupos y asociaciones gremiales como los ganaderos, agroindustriales y terratenientes, los cuales han compartido tradicionalmente sus posturas con respecto al tratamiento del conflicto armado.

por un discurso *antiestablishment* (tales como la política de *seguridad democrática* y la lucha contra la “corrupción y la politiquería”), es necesario examinar con mayor detalle los otros rasgos característicos del populismo, pues la trayectoria del ascenso y gestión de Uribe reviste unas particularidades que van alejando sistemáticamente a su gobierno de la caracterización populista.

En efecto, si examinamos como rasgo distinto del populismo la necesidad de contar con el apoyo de una coalición política policlástica, heterogénea y concentrada en los sectores subalternos de la sociedad, podríamos advertir que el triunfo electoral de Uribe y sus altos niveles de popularidad obedecen al apoyo de una amplia base. Sin embargo, los alcances de esta advertencia llegan hasta un cierto punto al señalar que los índices de medición de la popularidad del presidente son obtenidos en su mayor parte por encuestas de opinión financiadas por los grandes medios de comunicación a nivel nacional, la mayor parte de los cuales han manifestado su respaldo de manera explícita o tácita a la gestión gubernamental. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que tales sondeos se realizan principalmente en los grandes centros urbanos, en sectores medios y altos y no tienen en cuenta las opiniones de los habitantes de otras regiones, especialmente aquellas que en la actualidad asumen de una forma más directa los rigores del conflicto armado y sus consecuencias en términos de seguridad y bienestar social a los que se hizo alusión en la sección anterior.

Con relación a los procesos de movilización política propios del populismo, los cuales se presentan en un esquema de arriba hacia abajo y que pasan por alto las formas institucionalizadas de mediación o las subordinan a vínculos más directos entre el líder y las masas, el caso del actual gobierno colombiano difiere significativamente de esta caracterización e incluye elementos más complejos relacionados con las estructuras de poder ge-

neradas por el conflicto armado en Colombia. Si bien se ha destacado el patrón personalista y paternalista de la administración Uribe, especialmente en los consejos comunitarios de gobierno realizados a nivel regional y local, hay que señalar que aunque la figura de Uribe se presentó como alejada de la estructura institucional y de la cultura política de los partidos tradicionales, especialmente del partido liberal (su afiliación política original), ésta cuenta con un amplio respaldo en el Congreso y en instancias de decisión regionales y locales de sectores afiliados a las redes y a las prácticas clientelistas propias de los partidos tradicionales. En este sentido, se han presentado como estrategias de cooptación el nombramiento de familiares de congresistas en cargos diplomáticos, así como los esfuerzos por debilitar a los posibles opositores a sus políticas a través de estas mismas estrategias¹². Éstas lógicas se reproducen constantemente en los niveles regionales y locales y ponen en evidencia la fuerte contradicción existente entre las prácticas gubernamentales y los criterios y políticas de austeridad, transparencia, eficacia y meritocracia del programa de gobierno del actual mandatario.

Por otro lado, al examinar las transformaciones generadas por el conflicto armado en la cultura política colombiana, se advierte con preocupación que, luego de tres años de implementación de la política de seguridad democrática, los grupos subversivos y, en mayor medida, los grupos paramilitares, constituyen una fuerza importante del poder local en una buena parte del país¹³, situación

12 Este es el caso del nombramiento del ex – presidente Andrés Pastrana (quien había cuestionado seriamente a nivel público algunas de las iniciativas gubernamentales) como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos y de su dos veces contendor en las campañas presidenciales, el dirigente liberal Horacio Serpa, como embajador ante la Organización de Estados Americanos.

13 En este sentido, es necesario recordar que los grupos armados (bien sean subversivos o paramilitares) aún

a la que se suma el respaldo abierto que algunos de estos grupos o sus agentes financieristas brindan a la actual administración (lo que incide de manera significativa en las estructuras de poder y en las formas institucionalizadas de relación con las bases populares). Así, el poder alimentado por la figura paternalista y personalista del actual mandatario se consolida a través de unas fuertes redes de mediación clientelista bien sea a través de miembros de los partidos tradicionales y, en el peor de los casos, de organizaciones armadas en algunas regiones del país, cuestionando seriamente la tesis sobre la vinculación directa con el líder.

Un último rasgo característico del populismo lo constituye un proyecto económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas ampliamente difundidos con el fin de crear una base material para el apoyo del sector popular; en otras palabras, se considera al “populismo económico” en particular como un atributo básico del populismo en general. Sin embargo, Roberts considera que esta última categoría puede constituirse en un reduccionismo en la medida en que, en diferentes tipos de experiencia populista, los datos específicos de la política macroeconómica son variables. Éstos pueden estar orientados por el mercado o por el Estado, pueden estar abiertos o cerrados a la competencia internacional, ser permisivos o disciplinados desde el punto de vista fiscal y progresivos o regresivos en su efecto distributivo general. Esta flexibilidad permitiría entonces que el concepto populista se mueva a través de diferentes estrategias de desarrollo, reconociendo entonces la existencia de múltiples y diversos instrumentos económicos para cultivar el apoyo de las clases bajas (Roberts 1999:392).

eje en prácticas como la “autorización” para la realización de elecciones, la postulación de candidatos, establecen criterios para la distribución de recursos públicos y administran justicia. Estas formas coexisten de una manera compleja con las instituciones estatales y aún no han logrado ser superadas pese a las promesas e imperativos de las políticas del actual gobierno.

Sin embargo, este último atributo del populismo es uno de los más susceptibles de ser cuestionado a la hora de examinar una experiencia como la colombiana a la luz de categorías como neopopulismo. Tal cuestionamiento puede ser establecido a partir de dos razones. La primera podría ser de carácter histórico y se relaciona con la ausencia de populismo (tanto en sus formas políticas como económicas) en el país. La segunda tiene que ver de manera directa con la crítica de Carlos Vilas a la hipótesis neopopulista y se explica desde las estructuras y procesos políticos propios del modelo neoliberal de desarrollo bajo los cuales se pone a prueba la plausibilidad de esta hipótesis en el país.

Con relación a una razón de carácter histórico se advierte a lo largo de la trayectoria política colombiana un marcado rechazo hacia formas caudillistas o personalistas de autoridad, el cual sumado a la fragmentación de la unidad nacional generada desde los partidos liberal y conservador, incidió significativamente en la imposibilidad de construcción de un proyecto nacional a partir de una sólida base popular. El carácter atípico colombiano con respecto al populismo latinoamericano también se advierte en términos económicos en la medida en que, tal y como señalaba Pécaut, predominó una gestión de carácter privatizado contraria a la tendencia latinoamericana a aumentar la importancia de regulación estatal en la década de los años treinta. De manera paralela, iniciativas como la reforma agraria (pese al establecimiento del principio de la función social de la propiedad de 1936) y políticas de carácter redistributivo han estado marcadas por la senda del fracaso y cualquier tipo de asignación de recursos a las poblaciones más necesitadas se ha canalizado principalmente a través de mecanismos clientelistas, más que a partir de una gestión focalizada y dirigida desde el Estado. Para Miguel Urrutia, la ausencia de un “macropopulismo económico” en la historia de

Colombia puede ser explicada principalmente por la existencia de las fuertes maquinarias de los dos grandes partidos políticos, la concentración del poder político en el nivel local y el consecuente clientelismo que se deriva de la conjugación de los dos factores anteriores (Urrutia 1991:386). Sin embargo, Urrutia reconoce que esta ausencia de populismo ha sido más benéfica para el país en la medida en que se constituye como factor explicativo de su estabilidad macroeconómica que le permitió sortear de una mejor manera la crisis de los ochenta, en comparación con otros países de América Latina.

En lo que respecta a las posibilidades de una forma de neopopulismo económico en el contexto del nuevo orden mundial y del modelo neoliberal de desarrollo, es importante señalar nuevamente que, a diferencia de los gigantes latinoamericanos, en Colombia no se han implementado grandes políticas efectivas tendientes a disminuir (por lo menos parcialmente) los costos sociales de los planes de estabilización macroeconómica. Si bien puede destacarse el caso de la creación de algunos programas como la Red de Solidaridad Social durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998) y proyectos a nivel local dentro del esquema general del Plan Colombia¹⁴ en los gobiernos de Pastrana y Uribe, las políticas macroeconómicas y sociales colombianas se han caracterizado por ser mucho más rigurosas en términos de disciplina fiscal, reforma del Estado y recorte del gasto público, con lo cual se puede advertir un grado de continuidad en la tendencia histórica de la gestión económica del país, aunque convivan sin nin-

guna dificultad con estructuras y prácticas clientelistas que han generado, precisamente, un fuerte grado de pasividad ciudadana frente a tales políticas. Por otro lado, las exigencias propias de la implementación y mantenimiento de una iniciativa como la política de seguridad democrática durante la administración Uribe, han obligado a destinar importantes recursos (que podrían ser orientados al gasto social) a la intensificación de la guerra contra el terrorismo, la cual se constituye a la postre en el centro del supuesto novedoso proyecto de unidad nacional del presidente de los colombianos.

Por otro lado, la hipótesis sobre el “neopopulismo económico” en la era neoliberal, sustentado principalmente en un debilitamiento y fragmentación de las formas institucionales de representación que caracterizaron al Estado desarrollista, se cuestiona desde la conceptualización misma que se hace del populismo económico. En efecto, para Carlos Vilas existe una especie de reduccionismo fiscalista a la hora de dar cuenta del populismo económico en la medida en que se le define como un régimen económico que, al enfatizar el crecimiento y la distribución del ingreso, descuida los peligros de inflación y déficit fiscal, las restricciones externas y las reacciones de algunos actores del mercado a la regulación estatal; en otras palabras, el populismo sería una mala política macroeconómica (Vilas 2004:20). Teniendo en cuenta los antecedentes presentados con respecto al manejo de las políticas macroeconómicas en el caso colombiano, nuevamente pierde fuerza la hipótesis neopopulista.

Consideraciones finales

El populismo ha sido una de las categorías más utilizadas en el ámbito de las ciencias sociales en la descripción de los procesos sociopolíticos en América Latina, pese a la existen-

14 El Plan Colombia se diseñó como un plan de inversiones para la paz, constituido con aportes tanto del Estado colombiano como de la comunidad internacional (especialmente Estados Unidos), destinado, inicialmente, a obras de infraestructura que luego desembocaron, por otro lado, en acciones como las fumigaciones de cultivos ilícitos en amplias zonas del país.

cia de un muy reducido (y siempre cuestionable) consenso alrededor de los criterios y fenómenos particulares a los que hace alusión. Sin importar su naturaleza ideológica (izquierda o derecha) y las formas del ejercicio del poder a las que hace alusión (autoritaria o democrática), el populismo se constituye como el referente explicativo por excelencia de fenómenos como la transición hacia la modernidad, la movilización de masas y la personalización del liderazgo político propios de las primeras décadas del siglo veinte latinoamericano. Varias décadas después, en el contexto de una nueva “crisis”, del retorno de la democracia y del modelo neoliberal de desarrollo, el populismo aparece nuevamente como el único concepto capaz de dar cuenta de la situación de inestabilidad política e incertidumbre que ha caracterizado la trayectoria de la región en los últimos años.

Aquí la tarea es más bien examinar hasta qué punto el uso de la categoría populismo (y neopopulismo) encubre o matiza una serie de fenómenos políticos que sí deben examinarse con preocupación como lo es el autoritarismo, la corrupción y el retroceso de libertades políticas e importantes conquistas generadas en décadas de lucha social. En este caso, apelando a la sabiduría popular según la cual se debe “llamar al pan, pan y al vino, vino”, se advierte un cierto abuso del término “neopopulismo” para dar cuenta de acontecimientos políticos como los que han marcado la historia de la región andina en general y de Colombia en particular en los últimos años. En otras palabras, al juzgar a un gobierno o a una tendencia política como “neopopulista” se puede correr el riesgo de desconocer las realidades que se ocultan bajo una figura carismática o un heterodoxo programa de redistribución económica o, como afirma Vilas, puede caerse en un simplismo conceptual en el que se confunde el todo con las partes.

Teniendo en cuenta la anterior consideración, antes de hablar de neopopulismo es ne-

cesario realizar un análisis riguroso de las particularidades propias de cada país y de las continuidades y discontinuidades en sus procesos políticos, sociales y económicos. Esta exigencia es aún más apremiante en el caso colombiano, en la medida en que, a diferencia de otros países de la región, no se ha contado con una experiencia populista ni con un efectivo proyecto de unidad nacional a partir del cual pudiera establecerse una idea de nación a largo plazo. La política de seguridad nacional del presidente Álvaro Uribe no ha logrado constituirse como un proyecto de unidad nacional, ni mucho menos cimentado en una sólida base popular, rasgo fundamental del populismo latinoamericano. Por el contrario, bajo la lógica de la disyuntiva amigo-enemigo, utilizada de manera indiscriminada contra amplios sectores de la población, se ha polarizado a la población colombiana, la cual no parece tener otra alternativa que la de seguir siendo testigo del desmonte de las libertades políticas y de las muy deterioradas instituciones democráticas, a la par que el conflicto armado continúa sin posibilidades de una pronta resolución. Por ello, analizar a la actual administración bajo el calificativo “neopopulista” no solamente es insuficiente e impreciso en términos históricos, sino que también puede llegar a ser irresponsable en la medida en que no se pueda mostrar -en la dimensión que corresponde- los riesgos que a largo plazo pueden tener iniciativas como la de la seguridad democrática para el muy incierto futuro de una sociedad como la colombiana.

Bibliografía

- Arango, Rodolfo, 2005, “La reelección, al banquillo”, en *El Espectador*, Bogotá, octubre 16, p.4A.
- Ayala Diago, César Augusto, 2004, “Entre el positivismo y el populismo: la experiencia brasileña”, en Consuelo Ahumada y Telma Angarita, editoras, *La región andina: entre los nuevos populismos y la movilización social*, Pontificia Universidad

- Javeriana- Fundación Konrad Adenauer, Bogotá.
De la Torre, Cristina, 2005, *Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia*, La Carreta Editores, Medellín.
- Dix, Robert, 1985, "Populism: Authoritarian and Democratic", en *Latin American Research Review*, Vol. 20, No. 2, Universidad de Texas, p. 29-52.
- Elías, Norbert, 1998, "Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación", en *Historia y Sociedad*, No. 5, Cochabamba, p. 101-117.
- Entrena, Francisco, 2001, "Del declive del populismo estructural mexicano al neopopulismo personalista de Vicente Fox", en *Iberoamericana*, Vol. 1, No. 2, Ibero-Amerikanische Institut Preußischer Kulturbesitz, Berlín, p.107-127.
- Galindo Hernández, Carolina, 2005, "De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: nuevos problemas, viejos esquemas", en *Estudios Sociojurídicos*, No.7 (Especial "Justicia transicional: memoria colectiva, reparación, justicia y democracia"), Universidad del Rosario, Bogotá, pp.496-543.
- Knight, Alan, 1998, "Populism and Neo-Populism in Latin America, Especialmente México", en *Journal of Latin American Studies*, Vol.30, No.2, Cambridge University Press, p.223-248.
- Leal Buitrago, Francisco, 2003, "La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez", ponencia presentada en el foro de celebración de los 25 años de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, Bogotá. (Mimeo).
- Mackinnon, María Moira y Mario Alberto Petrone, 1999, compiladores, *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta*, Eudeba, Buenos Aires.
- Palacios, Marco, 2000, "Presencia y ausencia de populismo: un contrapunto colombo-venezolano", en *Análisis Política*, No. 39, IEPRI-UNCB, Bogotá, p. 33-54.
- Pécaut, Daniel, 2003, *Midiendo fuerzas. Balance del primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Planeta, Bogotá.
- , 2000, "Populismo imposible y violencia: el caso colombiano", en *Estudios Políticos*, No. 16, Universidad de Antioquia, Medellín, p.45-70.
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2005, *Más allá del em-
brujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá.
- , 2004, *Reelección: el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Antropos, Bogotá.
- , 2003, *El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Antropos, Bogotá.
- Presidencia de la República – Departamento Nacional de Planeación, 2002, *Hacia un Estado Comunitario. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006*, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- Presidencia de la República – Ministerio de Defensa Nacional, 2003, *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, Bogotá.
- Prud'homme, Jean François, 2001, compilador, *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, El Colegio de México- Centro de Estudios Internacionales, México.
- Quintero, Rafael, 2004, *Nueva crítica al populismo*, Abya Yala, Quito.
- Roberts, Kenneth M, 1999, "El neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso peruano", en María Mackinnon y Mario Alberto Petrone, compiladores, *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta*, Eudeba, Buenos Aires.
- Sarmiento Anzola, Libardo, 2004, "Malestar social y política pública", en Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, *Reelección: el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, pp. 89-97.
- Vilas, Carlos, 2004, "¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas?", en Consuelo Ahumada y Telma Angarita, compiladoras, *La región andina: entre los nuevos populismos y la movilización social*, Pontificia Universidad Javeriana-Fundación Konrad Adenauer, Bogotá.
- Urrutia, Miguel, 1991, "On the Absence of Economic Populism in Colombia", en Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, editores, *The macroeconomics of populism in Latin America*, Chicago University Press.
- Zermeño, Sergio, 1989, "El regreso del Líder: Crisis, Neoliberalismo y Desorden", en *Revista Mexicana de Sociología*, No. 51, Comité Editorial, México.